

REAL ORDEN

de 27 de agosto de 1904, aprobando el proyecto con determinadas modificaciones. ⁽¹⁾

Pasado a informe del Consejo de Estado en pleno el expediente relativo a la aprobación del proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá, dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 15 de julio último, el siguiente dictamen:

«EXCMO. SEÑOR: En cumplimiento de Real orden, comunicada en 24 de junio último por el Ministerio del digno cargo de V. E., el Consejo de Estado en pleno ha examinado el adjunto expediente, del cual resulta:

Que el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de acuerdo de la misma Corporación, solicitó del Ministerio, en instancia fecha 18 de noviembre de 1898, autorización para proceder al estudio definitivo del anteproyecto formado por los Arquitectos municipales, D. Francisco Andrés Octavio y D. José López Sallaberry, para la reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá, tomando como base el proyecto aprobado en 28 de enero de 1862 y utilizando las expropiaciones ya hechas.

Concedida dicha autorización con la fórmula de «sin perjuicio de los derechos que sobre el particular se hubiesen adquirido», por Real orden fecha 27 de enero de 1899 se procedió, con cargo al presupuesto municipal y bajo la dirección de los Arquitectos antes expresados, a la práctica de los estudios correspondientes, los cuales quedaron ultimados en 2 de julio de 1901, o sea dentro del plazo de prórroga concedido al efecto por Real orden de 26 de enero del mismo año.

Como consecuencia de tales estudios propusieron los Arquitectos Octavio y Sallaberry la apertura de una calle en línea recta, con un ancho de 20 metros, que, partiendo de la plaza de Leganitos, terminase en la del Callao; otra con un ancho de 35, desde este último punto a la Red de San Luis, la cual debería quedar unida con la calle de Alcalá, cerca de la iglesia de San José, por otra vía del mismo ancho que la primera.

Al proyecto acompañaron la correspondiente Memoria descriptiva, planos, presupuestos, relación completa de todos los bienes y derechos cuya expropiación parcial o total estimaron necesaria, valoración de los mismos derechos (con excepción de los reales establecidos sobre inmuebles), valoración de las vías públicas que habían de desaparecer y de las que habían de resultar con la realización del proyecto, tasaciones periciales de las expropiaciones valoradas, y los pliegos de las condiciones facultativas y económico administrativas de la subasta.

Anunciado el proyecto en la *Gaceta*, *Boletín oficial de Madrid* y tablón de anuncios de la primera Casa Consistorial el 3 de julio de 1901, a fin de que durante el plazo de treinta días pudiera examinarlo el público y formular por escrito cualquiera reclamación u observación acerca del mismo, se presentaron dentro del indicado plazo tres instancias. La primera, a nombre de los herederos de D. Carlos Velasco, pidiendo que se les facilite el procedimiento para llegar a la construcción de una Gran Vía desde la calle de Alcalá a la plaza de San Marcial, con arreglo al proyecto de su causante, fundándose principalmente en que dicho proyecto fué aprobado por el Ayuntamiento en sesión del día 4 de febrero de 1887, y debe entenderse bien acogido a los beneficios de la ley de 18 de marzo de 1895; la segunda, suscripta por D. Carlos González Entreríos, para protestar de la valoración asignada en el proyecto a la casa núm. 16 de la calle de Silva; y la tercera, del Marqués de Zafra, que expone en forma interrogativa las dudas que le sugiere el examen del proyecto, principalmente por lo que hace relación a la procedencia de ejecutarlo antes de que se apruebe el plan general de reformas de Madrid.

(1) Se suprimen los pliegos de condiciones, por existir otros aprobados por Real orden de 26 de agosto de 1900.

El Ayuntamiento, en 28 de diciembre de 1901, aprobó el informe emitido por la Comisión cuarta, de conformidad con la Junta Consultiva municipal, en el cual se consignan las condiciones siguientes:

- 1.^a La reforma en el interior de Madrid, proyectada por los Arquitectos López Sallaberry y Octavio, es necesaria y conveniente.
- 2.^a El trazado de la vía general satisface todas las condiciones técnicas y de conveniencia pública que son exigibles, proponiendo que en su día se procure reducir a 4 por 100 la pendiente de los últimos 154 metros de la plaza de Leganitos.
- 3.^a El enlace de dicho trazado con las vías afluentes se ajusta a las exigencias particulares de cada caso, resolviendo las dificultades dimanadas de sus alineaciones y rasantes.
- 4.^a La redacción del proyecto se ajusta al pie de la letra a las disposiciones de la ley de 18 de marzo de 1895 y su reglamento de 15 de diciembre de 1896.
- 5.^a Igualmente es beneficioso para el Erario municipal.
- 6.^a No son de estimar las reclamaciones ni observaciones que sobre el aspecto técnico del proyecto han sido hechas por los herederos de D. Carlos Velasco y por el Marqués de Zafra; y
- 7.^a En mérito de las anteriores conclusiones, procede aprobar el proyecto en todas sus partes.

La Junta Municipal, en sesión de 12 de marzo de 1902, sancionó el acuerdo del Ayuntamiento con la aclaración de que éste no prejuzga cuestión ninguna de propiedad del proyecto. Remitido el expediente al Gobernador civil de la provincia, dicha Autoridad procedió a publicar en el *Boletín oficial* de 21 de junio de 1902 las expropiaciones proyectadas y sus correspondientes tasaciones, y a requerir a los arrendatarios, comerciantes e industriales que, según certificados de los Registros de la propiedad y mercantil, estimaba con derechos a indemnización, para que se declarasen o no conformes con las tasaciones de sus respectivos bienes o derechos, habiendo oficiado además al mismo efecto, en 12 de mayo anterior (según se hace constar al folio 2 del expediente formado en el Gobierno civil), a todos los propietarios interesados en el expediente, cuya relación consta en el mencionado *Boletín oficial*.

El plazo para admitir las reclamaciones de todos se prorrogó, por acuerdo del Gobernador, publicado en el *Boletín oficial* de 27 de junio, hasta el día 5 de julio siguiente. Gran número de interesados manifestaron, al ser requeridos, su conformidad con las tasaciones practicadas, pasándose las reclamaciones de los demás a estudio y fallo del Jurado especial que había de entender de ellas en primera instancia, previa formación de la correspondiente pieza separada.

Constituido el Jurado sin que se formulase protesta ni reclamación alguna contra la capacidad legal de los que le constituyeran, ni contra su constitución (no obstante haberse insertado los correspondientes anuncios en las *Gacetas* de 31 de agosto y 5 y 12 de octubre de 1902), dió comienzo a sus tareas en 14 de marzo de 1902, terminándolas en 12 de junio de 1903, fecha en la cual se disolvió. De estos fallos, 66 fueron recurridos por los interesados, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación, y los demás o fueron consentidos, o se recurrió contra ellos fuera del término indicado, o no llegó a formalizarse la apelación, limitándose el Ayuntamiento a consignar, en oficio fecha 16 de julio de 1903, que se entendiera manifestada su voluntad en tal forma, a su juicio suficiente. Aparte de las indicadas, constan otras reclamaciones de indemnización suscritas por comerciantes e industriales, no comprendidas en las relaciones presentadas por los autores del proyecto, las cuales, como presentadas después que el Jurado terminó sus tareas, y, por extemporáneas, han sido desestimadas por el Gobernador civil en 30 de marzo de 1904, de conformidad con lo informado por la Comisión provincial; y algunas instancias en las que se protesta no se haya considerado parte legítima en el expediente más que a los inscriptos en el Registro mercantil, o de la constitución del Jurado, o del plazo de diez años de residencia que se exige a los comerciantes para declararlos con derecho a indemnización, o de la omisión cometida al no requerir *individualmente* a todos los interesados en las expropiaciones, a fin de que pudieran producir, en término hábil, las reclamaciones que estimasen procedentes, acompañadas de los justificantes oportunos.

La Comisión provincial de Madrid, en 24 de mayo de 1904, informa acerca del expediente general de que se trata, reproduciendo las conclusiones del dictamen de la Junta Consultiva mu-

nicipal antes transcritas, sin perjuicio de haber informado también por acuerdo del Gobernador acerca de cada uno de los expedientes parciales de indemnización.

En análogo sentido, favorable al proyecto, ha informado el Gobernador civil al elevarlo a esa Superioridad, con oficio fecha 30 de marzo de 1904; limitándose a manifestar, por lo que se refiere a las reclamaciones contra los fallos del Jurado, que las de particulares figuran debidamente informadas con los expedientes que ha elevado y eleva a ese Ministerio, proponiéndose en tales informes, respecto de las más, que deben confirmarse los fallos del Jurado, ya que determinando la ley bases fijas para reclamar la tasación, queda ésta reducida a una sencilla operación aritmética, y por lo que hace relación a la del Ayuntamiento, que se prefiera la tasación del proyecto en virtud de las consideraciones expuestas por sus autores en el acto de la vista.

Remitido el expediente a ese Ministerio, se han presentado al mismo directamente o por conducto de la Alcaldía tres instancias suscritas por los herederos de D. Carlos Velasco, en las cuales insisten en que se dé al proyecto llamado de «Gran Vía», firmado por su causante, la tramitación de la ley de Expropiación forzosa de 1879, para no lesionar derechos adquiridos; intentan la recusación de algunos de los Vocales de la Junta de Urbanización, por haber emitido ya informe en el expediente, y solicitan que, en definitiva, éste se declare nulo por no haberse hecho el depósito del 10 por 100 del importe total del presupuesto; por no haber sido citados los que tienen sobre las fincas expropiables reconocidos o análogos derechos reales; por no haber sido citados los arrendatarios que tienen sus derechos anotados en el Registro de la propiedad; por haberse exigido la inscripción de los comerciantes en el Registro mercantil; por haber ejercitado las funciones de Jurado persona en quien concurría la circunstancia de ser ayudante de los concesionarios del proyecto y de la parte interesada en alguna de las expropiaciones, y por no haberse practicado el requerimiento individual y en el domicilio de la persona a que se refiere el artículo correspondiente; alegaciones éstas que han sido impugnadas por los Arquitectos Octavio y Sallaberry en escrito de 18 de abril de 1904.

La Junta Consultiva de Urbanización y Obras, informó en 4 de mayo próximo pasado en sentido favorable a las condiciones técnicas y económicas del proyecto de que se trata, en sí mismo y en relación con el de D. Carlos Velasco, salvando aquellas modificaciones que hacen indispensable las nuevas valoraciones practicadas, y respecto a éstas, en 14 de junio de 1904, haciendo constar:

1.^o Que habiendo prestado su conformidad muchos propietarios a las tasaciones de los Arquitectos o a los fallos del Jurado, la Junta ha creído innecesario examinar los expedientes referentes a dichos interesados.

2.^o Que respecto a los expedientes cuyos fallos han sido recurridos en tiempo y forma, la Junta está conforme con las tasaciones fijadas por el Jurado, a excepción de las referentes a las dos casas, números 1, de la calle del Desengaño y 9, 11 y 13 de la misma calle, por considerarlas excesivas, y estima más aproximado a la verdad las tasaciones fijadas por los Arquitectos autores del proyecto.

3.^o Que en cuanto al expediente de la casa núm. 15, de la calle de Jacometrezo, cree la Junta más equitativo asignar a la misma valoración de 37.737'80 pesetas, dada por uno de los autores del proyecto en el acto de la misma ante el Jurado.

4.^o Que aunque conforme la Junta con la valoración de 80.320'90 pesetas, fijada por el Jurado a la casa núm. 31, de dicha calle de Jacometrezo, debe llamar la atención del Sr. Director de Administración, del Consejo de Estado y del Sr. Ministro, sobre los diversos datos y tasaciones comparados con la casa núm. 29, de la misma calle, para que no pasen desapercibidos; por si estiman conveniente dictar alguna disposición legal.

5.^o Que debe inhibirse esta Junta, como lo ha hecho el Jurado, la Comisión provincial y el Gobernador, del conocimiento del expediente relativo a la casa números 2, de la calle de la Parada; 7, de la de Federico Balart, y 10, de la Flor Baja, por hallarse pendiente de resolución otro expediente incoado con anterioridad para la expropiación de dicha casa.

6.^o Que también debe inhibirse del conocimiento de veintisiete expedientes en que el Ayuntamiento de esta Corte inició la interposición de recurso de alzada, sin que éste llegara a formalizarse y presentarse con arreglo a la ley y disposiciones vigentes en la materia, quedando, en su consecuencia, firme el fallo del Jurado.

7.º Dar por vistos, sin emitir juicios sobre ellos, seis expedientes relativos a dos casas y cuatro solares, por haber sido ya expropiados y pagados por el Ayuntamiento.

8.º Que no corresponde a esta Junta examinar, por extemporáneos, los expedientes relativos a indemnizaciones reclamadas por comerciantes e industriales.

9.º Que las dos instancias elevadas por aquéllos a esta Junta reclamando contra ciertos defectos legales de que a su juicio adolecen los expedientes que a ellos se refieren, se remitan con los demás antecedentes al Ilmo. Sr. Director general de Administración para que provea lo que mejor estime con arreglo a derecho; y

10. Que se una al presente dictamen, para los efectos que procedan, el escrito formulando voto particular en varios expedientes por el Vocal Sr. Conde de Vilches, Presidente de la Asociación de Propietarios y el del Sr. García Prieto. En los expresados votos particulares, D. Manuel García Prieto propone que se pague al dueño de la casa núm. 80, de la calle de Jacometrezo y 14, de la de Tudescos, la cantidad de 413.865'82 pesetas, y el Conde de Vilches que se aumente la valoración:

1.º De las casas números 13, de la calle de San Bernardo; 80, de la calle de Jacometrezo; 31, de la de Mesonero Romanos; 40, de la de Leganitos; 12, de la de San Cipriano; otra, cuyo número no expresa, de la Flor Baja; 18, de Isabel la Católica; 22, de la plaza de los Mostenses, y 23 duplicado, de la calle del Caballero de Gracia, porque si bien es cierto que ha sido unánime el fallo pronunciado acerca de las mismas por el Jurado especial, no lo es menos que se ha incurrido en error de hecho al no admitirse otras mejoras o al determinar derechos reales que afectaban al inmueble, o el líquido imponible, o la total superficie expropiada.

2.º De las fincas acerca de las que se haya suscitado empate decidido por el voto de calidad del Presidente del Jurado, como sucede en las casas números 5 y 7, de la calle del Caballero de Gracia y 7 y 9, de la de los Leones.

3.º De aquéllas en que hay voto particular suscrito por los Jurados representantes de la Propiedad, la Industria, Comercio y Abogados, como sucede en las casas números 22, de la calle de la Abada; 9, de la del Caballero de Gracia; 7, de la de Ceres; 1 duplicado, de la del Clavel; 4, de la de Eguiluz; 11, de la de Hita; 1, 7, 9, 15, 17 y 56, 10 y 12, de la de Jacometrezo; 2, de la de los Leones; 10, de la de la Reina; 6, de la de San Jorge, y 19, de la de Silva.

4.º De las que tienen a su favor el fallo del Jurado o algún voto particular, como sucede con las casas, números 1, 9, 11, 13 y 17 de la calle del Desengaño y 10 y 12 de la del Carbón; y

5.º Que se haga extensivo el beneficio de los inquilinos-comerciantes a los dueños de las casas que ejerzan en las mismas, comercios o industrias, como sucede a los de los números 40 de la calle de Leganitos, 12 de la de San Cipriano y 27 de la de Isabel la Católica.

La Sección y Dirección correspondientes de ese Ministerio formulan las siguientes conclusiones:

1.ª Oír al Consejo de Estado en pleno, con carácter de urgencia, interesándolo así del Presidente de dicho alto Cuerpo y poniéndolo en conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo que previene el art. 18 de la ley de 5 de abril último.

2.ª Que salvo lo referente al pliego de condiciones económico administrativas, procede la aprobación del proyecto a la manera y con las modificaciones que la Junta de Urbanización y Obras de este Ministerio señala en su informe, debiéndose tener también en cuenta las que indicó la Junta Consultiva municipal.

3.ª Que procede excitar el celo del Ayuntamiento para que, no obstante lo dispuesto por el artículo 8.º de la ley de 17 de septiembre de 1896, formule un plan general de urbanización a la manera que indica dicha ley, y lo someta a la aprobación de este Ministerio.

4.ª Que no procede en vía administrativa reconocer a los herederos de Velasco ningún derecho de prioridad a favor del proyecto de su causahabiente, por no tener estado legal el mencionado proyecto.

5.ª Que no procede admitir las reclamaciones formuladas por el Marqués de Zafra.

6.ª Que no procede admitir la reclamación de los herederos de Velasco contra la tramitación del actual expediente, excepto en lo que se refiere al defecto de requerimiento a arrendatarios, comerciantes e industriales.

7.ª Que procede admitir las reclamaciones de los herederos de Velasco con relación a los arrendatarios, comerciantes e industriales, como asimismo la de los comerciantes e industriales, debiendo el Gobernador, una vez aprobado el proyecto, requerir a todos los comerciantes, industriales y arrendatarios a quienes no lo hubiese verificado, concediéndoles el plazo improrrogable de quince días para justificar su derecho, y, una vez terminado este plazo, elevar el expediente especial que se forme a este Ministerio, para que por el mismo se resuelva, previa audiencia de la Comisión del Consejo de Estado.

8.ª Que no procede admitir ni resolver la reclamación de D. Alfonso Courchinaux, pidiendo se indemnice a los comerciantes que lleven ejerciendo menos de diez años.

9.ª Que procede declarar que el expediente instruido en el Ayuntamiento, el incoado en el Gobierno civil y el tramitado para el funcionamiento del Jurado, se han ajustado en lo posible a la ley de 18 de marzo de 1895 y su reglamento, y los defectos que contiene, consistentes en que ni la Comisión provincial ni el Gobernador han podido informar en el plazo legal, ni el Jurado terminar sus tareas en el término prefijado, no pueden constituir vicio de nulidad, porque aparte de que no ha existido perjuicio de tercero, se demuestra la imposibilidad material de llevar a cabo lo dispuesto en los términos tan angustiosos que concede la ley.

10. Que no procede admitir como recursos los acuerdos del Ayuntamiento resolviendo alzarse de los fallos dictados por el Jurado en varios expedientes de expropiación de fincas (estado número 3-27 expedientes) y de indemnizaciones a comerciantes e industriales (estado núm. 1-13 expedientes), toda vez que al no formularse los recursos se ha contravenido a lo dispuesto por el art. 41 de la ley de 18 de marzo de 1895, y si procede declarar firmes los fallos del Jurado en lo relativo a los expedientes de expropiación; y en cuanto a los que se relacionan con indemnizaciones a comerciantes e industriales, procede revocar el fallo del Jurado en el extremo por el cual otorga a dichos comerciantes e industriales los derechos a un 5 por 100 de perjuicio y a un 3 por 100 de afección, toda vez que el espíritu de la ley es conceder a los comerciantes e industriales, así como a los arrendatarios, únicamente la indemnización que la misma regula.

11. Que procede aprobar los expedientes en los cuales existe conformidad entre los autores del proyecto y los interesados, o han aceptado las partes (Ayuntamiento y propietario) el fallo del Jurado (estado núm. 2-249 expedientes).

12. Que en los expedientes de no conformidad (estado núm. 4-82 expedientes), procede resolver como propone la Junta Consultiva de Urbanización y Obras de este Ministerio, y destimar los votos particulares formulados por el Conde de Vilches y Sr. García Prieto.

13. Que procede admitir el voto particular del Conde de Vilches en el extremo de que se indemnice al propietario de la finca que sea a la vez comerciante e industrial, por el perjuicio que se le ocasiona al trasladar la industria del local de su propiedad, poniéndole en iguales circunstancias que los demás comerciantes e industriales.

14. Que, de acuerdo con la Junta, procede inhibirse de conocer en el expediente relativo a la casa núm. 2, de la calle de la Parada; Federico Balart, 7, y Flor Baja, 10.

15. Que no puede constituir motivo de nulidad el hecho de que hayan sido firmadas varias tasaciones de fincas particulares por peritos no designados en el reglamento.

16. Que en el caso especial de este expediente no es preciso cumplir el trámite de audiencia que determinan la ley de 19 de octubre de 1889 y el reglamento de este Ministerio de 22 de abril de 1890, por tratarse de una ley que, como la de 18 de marzo de 1895, fija requisitos y concede intervención constante del interesado.

17. Que no procede aprobar el pliego de condiciones económico administrativas en la forma en que actualmente está redactado, debiendo el Ayuntamiento, inmediatamente de aprobado el proyecto y en el plazo de tres días, reformar dicho pliego de condiciones en lo referente a los artículos 1.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 20, 24, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 50 y 56, y al modelo de proposición, para ponerlos en armonía con la legislación vigente, con las demás conclusiones del dictamen y con el presupuesto definitivo, y para aclarar sus conceptos ó determinar de un modo más concreto la forma de verificar los pagos el Ayuntamiento.

18. Que, aparte de consignar en dicho pliego el modo y forma de satisfacer al contratista las cantidades que le ha de abonar, al remitir el pliego de condiciones mencionado a la aprobación

de este Ministerio, el Ayuntamiento debe manifestar con qué recursos cuenta y el origen de ellos, para saber si los emplea de los entregados por el Tesoro a cuenta de la liquidación y si compromete varias anualidades, y someter, caso de que proceda, el expediente y proyecto a la aprobación de las Cortes, de conformidad con lo que dispone el art. 6.º de la ley de 29 de diciembre de 1903; y

19. Que el Ayuntamiento debe ventilar la cuestión de propiedad del proyecto antes de anunciar la subasta, consignando en el pliego de condiciones lo relativo al modo con que se ha de entender el derecho de tanteo que la ley concede a los autores de proyectos, y si el contratista debe o no satisfacer alguna cantidad por la adquisición del proyecto que va a ejecutar.

Con tales antecedentes, el Consejo pasa a emitir el dictamen que con urgencia se le pide, refiriéndose, bajo el aspecto de su especial competencia, a todos los extremos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 24 de la ley de 18 de marzo de 1895, debe comprender circunstanciadamente la Real orden que habrá de dictarse por V. E., para otorgar o denegar su aprobación al proyecto de reforma, a las expropiaciones que en él se consignan como necesarias y a las tasaciones y valoraciones de bienes y derechos y para resolver las incidencias ocurridas. Por lo que hace relación al proyecto, puede el mismo ser examinado bajo diferentes aspectos, a saber: el de su propiedad, tramitación, conveniencia, utilidad y urgencia, ejecución y condiciones facultativas y económico administrativas.

Poco ha de decir el Consejo acerca de las cuestiones tan debatidas en el expediente por los herederos de D. Carlos Velasco, de la originalidad del proyecto hoy sometido a la aprobación de V. E., ni sobre el pretendido derecho de prelación del de su causante, porque, o caen bajo la esfera de acción de los Tribunales de justicia—quienes han sobreseído libremente una causa incoada contra los Arquitectos Octavio y Sallaberry por supuesto delito de defraudación de la propiedad intelectual—, o han sido ya resueltas, en vía gubernativa, a consulta de este Consejo, por Real orden de 27 de abril de 1901.

Esto sin contar con que los herederos de Velasco no podían en ningún caso tener personalidad para oponerse a la tramitación del actual expediente de «Prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá», porque la ley no la otorga de un modo expreso más que a los interesados o perjudicados en las expropiaciones, sin perjuicio de que aparte puedan cursarse otras instancias, disposición inspirada sin duda en el laudable propósito de evitar que con diferentes pretextos pueda paralizarse la tramitación con notorio perjuicio del interés general.

De tal suerte, que aunque el Ayuntamiento, al adoptar en sesión de 3 de marzo de 1886 su acuerdo sobre el proyecto de Velasco, no hubiera empleado una fórmula que no crea compromiso alguno; aunque no hubiere rechazado después la ejecución del proyecto, propuesta por un particular; aunque se hubiere resuelto acerca de la utilidad pública de aquél, como exigía la ley de Expropiación entonces vigente; aunque no se hubiera sometido voluntariamente el referido proyecto al imperio de la ley de 18 de marzo de 1895; aunque no se hubiera resuelto favorablemente acerca de tal pretensión por Real orden de 27 de abril de 1901, con la condición de «que se ajustará a las formalidades y requisitos que la nueva ley exige, y sin perjuicio de que tal resolución signifique preferencia ni privilegio alguno, ni adquisición de derechos de ninguna clase»; y aunque, en efecto, el proyecto de que se trata se ajustara a las condiciones de la nueva legislación, entiende el Consejo que no podría obligarse al Ayuntamiento de Madrid a ejecutar el proyecto de D. Carlos Velasco con preferencia a cualquier otro de superior interés y utilidad pública, sin perjuicio de los derechos que bajo otro aspecto pudieran los interesados hacer efectivos.

Un extremo hay, sin embargo, sobre el cual se permite llamar el Consejo muy especialmente la atención de V. E.: el relativo a propiedad del proyecto que se atribuyen los Arquitectos municipales Octavio y Sallaberry, a virtud del acuerdo que dicen haber adoptado el Ayuntamiento en sesión de 29 de mayo de 1903, del cual no constan otros antecedentes entre los remitidos a consulta (si bien se publicó en el *Boletín oficial* de 18 de julio siguiente), extremo que debe quedar aclarado y resuelto, a fin de que sea dato conocido y apreciado por todos los interesados en la futura subasta, y para evitar que puedan hacer prácticamente inútil ésta con el ejercicio del derecho de tanteo que la ley de 18 de marzo de 1895 les reconocería en su caso.

Acerca de tal cuestión entiende el Consejo que, cualesquiera que sean los acuerdos de la Corporación municipal, puede siempre V. E., en virtud de las facultades especiales que la citada ley le otorga en su art. 24, hacer las declaraciones oportunas para dejar a salvo los intereses públicos que con aquéllos pudieran quedar de otra suerte comprometidos, con tanto mayor motivo, cuanto que todos los contratos para obras o servicios públicos caen exclusivamente bajo la esfera de acción administrativa, y las concesiones administrativas de obras públicas, dado el carácter de inmuebles que el Código civil les reconoce, no pueden ser enajenadas sin autorización del Gobierno.

Ahora bien; aparece suficientemente acreditado que el Ayuntamiento es verdadero concesionario del proyecto, puesto que por sí recabó la autorización a fin de verificar los estudios, que le fué concedida por Real orden de 27 de enero de 1899; que el proyecto no es completamente original, sino mera reforma de otro, que desde 1862 venía tramitándose; que los Arquitectos municipales limitaron su intervención a ejecutar y dirigir los estudios que con aquel carácter les fueron encomendados; que tales estudios los verificaron con el auxilio de un numeroso personal facultativo de Arquitectos, Ayudantes y Delineantes del Ayuntamiento (folio 48), y a costa total del mismo, quien consignó en sus presupuestos las cantidades necesarias para todos los gastos, sin excluir los del pago del Jurado especial; que no hay disposición alguna que autorice los préstamos de tales elementos para realizar estudios particulares, y que es evidente, que en tales condiciones no puede atribuirse a los Arquitectos Octavio y Sallaberry la calificación de *autores*, y mucho menos en el concepto de *dueños ó concesionarios* del proyecto de que la hace equivalente la ley de 18 de marzo de 1895, la cual reconoce a los mismos el derecho de tanteo, como ya se ha dicho, y el de cobrar el importe de los proyectos a precio de tarifa, derechos que es absurdo puedan ostentar enfrente de la Corporación municipal, que mantiene a sueldo sus empleados facultativos.

De admitirse otro criterio, no tendría explicación satisfactoria el acuerdo que se dice adoptado por la Alcaldía en una nota (que figura al folio 30 vuelto del «expediente instruido a moción de aquélla para la aprobación del proyecto»), negándose a que se diera cuenta al Ayuntamiento de una solicitud favorablemente informada, en la que D. Enrique Horstmann ofrecía hacer a su costa los estudios del proyecto; acuerdo que sin duda no tuvo otro objeto que evitar en su día dispendios inútiles al Ayuntamiento, que hubiera tenido que comprar aquellos estudios; pero que, en definitiva, ahora vendrían a causarse, ya que es imposible desconocer que el contratista a quien se obliga al pago, obrando lógicamente, ha de rebajar su importe de la bonificación del tipo de subasta, a cargo de la Corporación expresada.

En cuanto a la tramitación del proyecto se refiere, el Consejo no puede menos de manifestar que no resulta ajustada a las disposiciones de la ley y reglamento tantas veces citados, por los cuales se rigen las obras de saneamiento y mejora de las grandes poblaciones. Prescindiendo de algunas omisiones relativas a plazos y otras que por su escasa importancia no afectan esencialmente a la validez de la tramitación, y fijándose en las principales y objeto de protesta, adviértese en primer término que entre las relaciones presentadas con el proyecto, dejaron de incluirse las relativas a la valoración de los derechos reales, constituidos sobre las fincas objeto de las expropiaciones, como exige el apartado 2.º, letra B, del art. 17 de la ley de 18 de marzo de 1895. Tal omisión produjo otra de no menor importancia, porque infringiéndose lo dispuesto en el artículo 23 de la misma ley, no fueron citados individualmente los repetidos interesados, encontrándose, por consecuencia, en la imposibilidad legal de defenderse en tiempo y forma procedente.

Se dice que semejante citación no es suficiente garantía para los poseedores de tales derechos, toda vez que el propietario puede constituirlos válidamente, aun después de valoradas las fincas para la expropiación, y que es mejor imponer la obligación de cancelarlos antes de consumar la enajenación forzosa de la finca, con vista del documento expedido por el Registro de la propiedad que acredite en forma legal y fehaciente el estado de aquélla.

El Consejo estima ese procedimiento como muy adecuado para que se logre el propósito de la ley, de extinguir toda clase de derechos reales, limitativos del dominio sobre los terrenos o edificaciones resultantes de la expropiación; pero no puede menos de reconocer que en caso de

divergencia entre éstos y el dueño, o del mismo con el concesionario, es preciso acudir al trámite de la enajenación, la cual supone un justiprecio previo, en el cual precisa dar la oportuna intervención a los dueños o poseedores legítimos de los expresados derechos limitativos del dominio.

No es, pues, un precepto redundante y sin transcendencia el del art. 23, más como quiera que el importe de las valoraciones está calculado sin deducción de cargas, entiende el Consejo que, si en algún caso no hubiese conformidad de los interesados para liberar aquéllas, podría cumplirse el trámite omitido formando la oportuna relación valorada de los derechos reales, citando individualmente a los dueños o poseedores de los mismos y practicando las demás actuaciones reglamentarias, incluso el nombramiento del Jurado especial, que habrá de reunirse de nuevo, sin perjuicio de seguir tramitando el expediente general hasta la adjudicación definitiva de la subasta.

Abona la adopción de tal medida, no sólo la circunstancia de que la misma ley de 18 de marzo de 1895 admite que pueda llegarse a la adjudicación definitiva de la subasta, antes de quedar ulimados los expedientes de expropiación parcial, acerca de los cuales se haya reclamado en vía contencioso administrativa, indicando los procedimientos que deben seguirse en los diferentes casos que puedan ocurrir, sino también la necesidad de proceder con la urgencia que recomienda la Real orden de 23 de junio de 1904, en asunto de tanto interés como el de saneamiento y mejora interior de Madrid, y el supuesto, no aventurado, de que habrán de ser pocos los que ahora se presenten a reclamar, no habiéndolo hecho durante los términos de los anuncios insertos en los periódicos oficiales.

Respecto de las reclamaciones que después de terminar sus tareas el Jurado especial que había de entender en ellas han formulado varios comerciantes e industriales, los más sin justificación de causa alguna de su olvido, y otros alegando que no han tenido conocimiento de los oportunos anuncios insertos en los periódicos oficiales, ni de las diligencias de expropiación, porque no se les ha citado *individualmente*, el Consejo entiende que son improcedentes, porque la obligación que al Gobernador impone el art. 23 de la ley, de practicar aquella diligencia, se ha de entender limitada, como demuestra la letra y espíritu de las demás disposiciones concordantes a los que *aparezcan* parte legítima; es decir, a los que, hallándose comprendidos en las relaciones correspondientes por iniciativa de los autores del proyecto o a virtud de reclamación formulada durante el plazo concedido al efecto ante el Ayuntamiento (y en este caso no consta formulada ninguna), tengan acreditada su condición de interesados en la forma y con los documentos que determinan los artículos 42 y 43 del reglamento de 15 de diciembre de 1896, en relación con el párrafo tercero del art. 18 de la ley de 18 de marzo de 1895, y que tampoco se han presentado todos, a saber: para los comerciantes, la certificación del Registro mercantil de llevar inscriptos diez años, y, además, para los comerciantes e industriales, sin distinción, certificación del Delegado de Hacienda, en que conste que durante dicho plazo de diez años aparecen inscriptos sin interrupción en la matrícula de subsidio y han satisfecho todas las cuotas de contribución, y contrato de inquilinato por el que se justifique la fecha en que entraron a ocupar la finca, o en su defecto, declaración jurada del dueño del inmueble en que habite, de que durante diez años consecutivos tienen establecida la industria o el comercio en el edificio, cuarto o heredad que se expropia.

Es, en efecto, inadmisibles exigir que el Gobernador civil cite *individualmente* a los comerciantes e industriales, a quienes no conoce ni puede conocer, porque no se cuidaron de reclamar en tiempo hábil; más inadmisibles aún que, a pretexto de reclamaciones extemporáneas e insuficientemente documentadas, se intente detener la tramitación de un expediente de interés general; y no muy justificado, que se prescinda para otorgar indemnizaciones de ninguna de las pruebas que en evitación de posibles fraudes se encuentran exigidas en el reglamento para la ejecución de la ley de Saneamiento y mejora del interior de las grandes poblaciones.

Dícese que no es obligatoria la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes particulares; pero si bien es cierto que el art. 17 del Código de comercio contiene tal disposición, no lo es menos que, a tenor del 18 y demás concordantes, no hacen fe contra tercero los documentos o hechos que no consten inscriptos y que, en armonía con el espíritu y letra de los mis-

mos, el reglamento de 15 de diciembre de 1896, exigió la inscripción de que se trata como medio de dar autenticidad al hecho que motive la indemnización. Y nada hay que decir del plazo de diez años, por ser una exigencia de orden legal de cuyo cumplimiento no puede prescindirse, como se pretende, sin fundamento alguno en las instancias que antes quedan relacionadas.

Además, por idéntica consideración del respeto que merece el imperio de la ley, que ha creado el Jurado especial para entender en las valoraciones de bienes y derechos, y por la garantía de competencia que para el buen desempeño de su cometido ofrece la calidad de las personas que deben constituirlo, entiende el Consejo que es inadmisibles la propuesta que esa Dirección general—inspirándose tal vez en el propósito de facilitar la tramitación de las reclamaciones—, hace para que se prescinda de aquel organismo legal.

Aparte de las que se expresan, también deben desestimarse, a juicio del Consejo, las demás reclamaciones formuladas, tales como las referentes a la constitución del Jurado, como quiera que tampoco se produjeron en tiempo hábil o sea en el de exposición al público de las listas y anuncios correspondientes y su admisión extemporánea habría de producir una grave perturbación con daño de los intereses públicos que el proyecto entraña, ni menos las consignadas en el voto particular del Conde de Vilches sobre deficiencias en los informes del Gobernador, ni las que ofrecerse pudieran sobre el carácter de los mismos, decidido por Real orden de 17 de noviembre de 1903, en cuanto determinó «que dicha Autoridad carecía de atribuciones para conocer del fondo de los recursos de alzada contra las resoluciones del Jurado, limitando su intervención solamente a funciones informativas, remitiendo luego los expedientes al Ministerio para su resolución.»

La conveniencia y utilidad del proyecto, considerada en concreto, no se encuentra, en opinión del Consejo, todo lo suficientemente acreditada que fuera de desear, pues entre otros extremos, es inadmisibles el ancho de 20 metros asignado a la llamada «Gran Vía» en sus secciones 1.^a y 3.^a, por ser muy inferior al que la experiencia tiene acreditado como indispensable en las grandes arterias de Madrid, y al preceptuado como mínimo en todas las grandes ciudades del extranjero y algunas de España, como Barcelona, faltando además un estudio comparativo completo con otros planes de reforma y con el general, que ha debido formarse en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 8.^o de la ley de 17 de septiembre de 1896. Esto, no obstante, como en el proyecto actual se procura de una manera inmediata, no fácil de lograr con otros, el saneamiento y mejora del interior de la población de Madrid (tan necesitada de útiles reformas que satisfagan las modernas necesidades de la circulación, ornato e higiene públicas), y el empleo útil de gran número de obreros que hoy dedica el Municipio a trabajos de escasa importancia, como arbitrio para evitar crisis peligrosas, el Consejo entiende que podría ejecutarse desde luego la sección 2.^a de la vía (desde la plaza del Callao a la Red de San Luis) a la cual se asigna un ancho de 35 metros y subordinarse la aprobación y ejecución, en su caso, de las secciones 1.^a y 3.^a (Leganitos-Callao y Red de San Luis-Alcalá) hasta que se estudien de nuevo y reformen en el sentido de que tengan la anchura mínima ya expresada de 35 metros. De esta suerte, dividiendo el proyecto general en proyectos parciales, no sólo se realizarían antes las obras de mayor apremio por referirse a las calles y casas peor urbanizadas o de más escasas condiciones higiénicas de todo el proyecto, sino que éste podrá ser objeto del más detenido estudio que necesita; y seguramente habrá de prevenirse el riesgo de la crisis, que, como consecuencia de la ejecución en más amplia escala de reformas en el interior de las grandes poblaciones, se han presentado en algunas, de las que puede servir Roma como ejemplo.

De lo expuesto se deduce la opinión del Consejo, contraria a la pretensión radical formulada por el Marqués de Zafra para que no se ejecute plan alguno de reforma hasta la aprobación del general, pretensión que es reproducción de otra anterior de la Asociación de propietarios del Ensanche y alrededores de Madrid, que fué ya desestimada por Real orden de 26 de marzo de 1903.

Cierto que sería muy conveniente, y en tal sentido ha informado ya este Consejo, determinar de una vez el plan de reforma de la Capital de España, tanto en su interior como en su ensanche; mas esta consideración no es bastante para poder prohibir la ejecución de reformas parciales que, previo el cumplimiento de las formalidades y trámites legales, se aprueben por V. E., porque ni existe precepto legal alguno que autorice semejante prohibición, ni sería prudente aconse-

jarla, puesto que equivaldría a cerrar la puerta a toda mejora de la población y tener que aguardar a la resolución más o menos remota que recayese sobre el plan de reforma general, y por eso el Consejo se limita en este punto a recordar la necesidad que, tanto por la Junta de Urbanización y Obras de ese Ministerio como por el Ayuntamiento de Madrid, se dé cumplimiento a lo preceptuado en la ley de 17 de septiembre de 1866 y algunas otras disposiciones posteriores como la Real orden de 26 de marzo de 1903, sobre formación del plan general de reformas de que se trata.

La ejecución del proyecto por subasta responde, en opinión del Consejo, a una verdadera exigencia legal, supuesto que el art. 45 de la ley de 18 de marzo de 1895 determina que «aprobado un proyecto por el Ministerio de la Gobernación, el Ministro lo devolverá íntegro en un plazo de diez días al Alcalde, y éste, en otro plazo de diez días, anunciará su contratación en pública subasta», y el art. 7.º del reglamento de 15 de diciembre de 1866, si bien admite que puedan realizar tales obras los Ayuntamientos, es siempre con autorización del Gobierno, a la cual deberá preceder la solicitud del Ayuntamiento y los informes del Gobernador civil y de la Comisión provincial, que versarán principalmente, no sólo sobre la urgencia, utilidad y conveniencia de la reforma proyectada, sino sobre la *falta de colectividades o particulares con las debidas garantías que soliciten la concesión de las obras*, y situación del Erario municipal y recursos de que pueda disponer para llevar a cabo aquéllas, sin desatender el cumplimiento de todas sus demás atenciones a que por la ley Municipal viene obligado.

No ha de examinar detenidamente el Consejo las condiciones facultativas propuestas para la ejecución de las obras, ni los demás asuntos exclusivamente técnicos, y ajenos, por tanto, a su especial competencia, limitándose en este punto a consignar la necesidad de que el art. 73, referente a las construcciones en la nueva vía proyectada se adicione en términos de que se hagan obligatorias las reglas que hoy tiene establecidas el Ayuntamiento para estimar las casas en condiciones de sanidad completa y el empleo de los modernos adelantos, en materia de chimeneas fumívoras y retretes de obturación hidráulica, pues resulta inadmisibles que, dada su manifiesta utilidad, pueda prescindirse de tales requisitos en las construcciones de nueva planta, donde tan fácil es cumplirlos.

Pasando al examen de las condiciones económico administrativas, el Consejo, después de recordar con carácter general la necesidad de que los artículos del pliego propuesto se modifiquen en términos de acomodarlos a la subasta del único trozo o sección cuya ejecución inmediata propone, debe hacer constar que, respecto del art. 1.º, en que los Arquitectos López Sallaberry y Octavio intentan reservarse los derechos de propiedad y tanteo del proyecto, da por reproducidas sus observaciones anteriores en contra de tan injustificada pretensión, y además que, a su juicio, debiera suprimirse por impertinente la cita que en el propio artículo se hace del 7.º del reglamento, y adicionarse con la del pliego general de condiciones para la contratación de Obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de mayo de 1903, el cual debe regir en los casos no previstos en el especial de que se trata.

El art. 3.º, también debiera modificarse en sentir del Consejo, en cuanto consigna que «si por una causa *cualquiera*, independiente de la *voluntad del rematante*, no pudieran comenzarse los trabajos en el tiempo fijado, se otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento», lo cual equivale a la derogación de todo plazo para la ejecución de la contrata, pues como fácilmente se advierte, aunque otro haya sido el propósito de sus redactores, la letra de dicho artículo impone la concesión de la prórroga cuando el contratista carezca de capital, de medios auxiliares o de cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento de sus compromisos, siempre que no dependa de su exclusiva voluntad, por lo que, en armonía con las disposiciones generales vigentes, debieran limitarse las concesiones de prórroga a los *casos de fuerza mayor debidamente* justificados. En idénticos términos sería oportuno aclarar la redacción del último párrafo del art. 29.

El art. 8.º, tal y como se encuentra redactado, parece fundarse en el supuesto erróneo de que la cantidad que figura en el proyecto como coste de las expropiaciones e indemnizaciones sólo puede aumentarse o disminuirse a virtud de resoluciones firmes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy Sala tercera del Tribunal Supremo), cuando en realidad dichas altera-

ciones pudieran ser consecuencia de resoluciones gubernativas firmes, recaídas en las reclamaciones a que se refiere el párrafo tercero del art. 5.º del reglamento de 15 de diciembre de 1866 u otras igualmente procedentes; y, en su virtud, propone el Consejo que se varíe la redacción del artículo de que se trata en términos de darle mayor amplitud, admitiendo como origen de modificación, además de las que expresa, las resoluciones gubernativas firmes y ejecutorias.

Además, tanto dicho artículo como el inmediato siguiente, el 49 y el 50, en su primera parte, no pueden subsistir en los términos en que se encuentran redactados, porque las cantidades que figuran en el proyecto al cual se refieren, como coste de las expropiaciones e indemnizaciones, y consiguientemente el presupuesto tipo de la subasta y fianza provisional y definitiva en su caso, resultan aumentados como consecuencia de los fallos del Jurado, y pueden alterarse también, a virtud de la resolución que por V. E. se dicte por virtud de la propuesta de este Consejo, circunstancias que deben tenerse en cuenta para evitar errores, en extremo tan esencial para la subasta.

Los artículos 10 y 24 no pueden subsistir en opinión del Consejo; el 10, porque, aunque en términos poco explícitos, pretende otorgar un monopolio para el suministro de fluido eléctrico a los particulares y el servicio del alumbrado público en las nuevas vías, prescindiendo, respecto de este último, de las formalidades de subasta especial, como previene la Instrucción vigente de 26 de abril de 1900; y el 24, porque, haciendo caso omiso del 76 de la ley general de Ferrocarriles de 20 de noviembre de 1877 y sus concordantes del reglamento de 24 de mayo, que exigen la formación del proyecto especial y subasta previa para el otorgamiento de concesiones de tranvías, y del Real decreto de 15 de diciembre de 1899, que declara de la exclusiva competencia del extinguido Ministerio de Fomento (hoy de Agricultura, Industria y Comercio), las concesiones de tranvías eléctricos, se pretende que V. E. considere incluida, en las obras objeto del contrato y en el precio del remate, la concesión para el tendido de una línea de tranvía eléctrico en toda la longitud de la vía general, siquiera se trate de paliar tal pretensión y eludir los preceptos legales citados, imponiendo al contratista el deber de presentar en el Ministerio correspondiente el oportuno proyecto para su tramitación, que, de hacerse con arreglo a la legislación en vigor, como se dice, no exigía ciertamente ninguna declaración especial.

No se oculta al Consejo que tales prohibiciones puedan influir en la concurrencia de licitadores; pero no por eso su convicción es menos firme, porque estima que la ley de 18 de marzo de 1895 llegó en sus artículos 13 al 15 al límite de las concesiones que creyó oportunas para favorecer los proyectos de saneamiento y mejora del interior de las grandes poblaciones; y porque las ventajas que de otra suerte se obtuvieran serían más bien aparentes, estando compensadas con los perjuicios que para los intereses municipales y generales habrían de ocasionarse.

También cree el Consejo procedente la supresión de los artículos 11 y 23, que expresan la libertad del adjudicatario para tomar los materiales de todas clases de los puntos que le parezcan convenientes, y la obligación del Ayuntamiento de adquirir del rematante los elementos de urbanización sobrantes de las calles reformadas, tanto porque el primero está redactado en términos confusos y es innecesario consignarlo en un pliego especial de condiciones como comprendido en el general de Obras públicas (art. 21), cuanto porque el segundo aparta al Ayuntamiento de su misión propia en esta contrata, y contribuye a mantener sus obligaciones en términos poco concretos, contra lo que, por el contrario, debe especialmente procurarse.

El art. 30 está redactado en términos ambiguos, que inducen a duda acerca de si los párrafos segundo y tercero se refieren, lo mismo que el primero, al caso de rescisión del contrato por incumplimiento, abandono o cualquiera de las demás causas determinadas por las disposiciones vigentes, debiendo, a juicio del Consejo, aclararse ambos párrafos y adicionarse el último, con objeto de reservar al Ayuntamiento o a quien quede subrogado en sus facultades para la ejecución del proyecto, un derecho de retracto convencional para poder adquirir por su precio de expropiación los solares edificables resultantes que se declaran a beneficio del contratista (en el supuesto de que los haya pagado), pues tal declaración, aunque de apariencia equitativa, pudiera en la práctica dificultar la ejecución del proyecto de reforma, si el contratista, después de hacerse dueño, valiéndose de su carácter de concesionario, de los mejores solares de la vía, abandonara el cumplimiento de sus obligaciones,

El art. 31 da por supuesta la obligación del Ayuntamiento de terminar por administración las obras de la sección donde hubiera sido rescindido el contrato, y en este sentido no puede admitirse, porque para la realización de dichas obras en la forma indicada, necesita la Corporación autorización especial de ese Ministerio, como exigen la ley de 18 de marzo de 1895 y su reglamento de 15 de diciembre de 1896.

La especial aplicación que al expediente adjunto tienen las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, y la superior eficacia que, como consecuencia de ellas, deben otorgárseles sobre la Instrucción general de 26 de abril de 1900, mueven al Consejo a proponer a V. E. la modificación de los artículos 41, 42 y 47 del proyecto, relativos al procedimiento para subasta, y del modelo, a fin de que desaparezca la intervención que en los mismos se atribuye a la Dirección; se haga constar en el 42 que el art. 17 de la Instrucción no se observará en lo que se oponga a la ley, es decir, en sus reglas 11 y 14; y se sustituya el 47 por el 48 de la propia ley, con el cual está en manifiesta oposición, pues mientras el primero expresa «que en caso de resultar dos o más proposiciones entre las admitidas como más beneficiosas para los fondos municipales, la adjudicación provisional del remate se hará a favor del autor de aquélla que tenga el número de orden más inferior»; el segundo consigna que «si resultaren dos o más proposiciones iguales en el acto de la subasta, se señalará media hora para recibir de los firmantes de aquéllas las mejoras que quisieran hacer, y la adjudicación se hará en definitiva a la proposición que resultare más beneficiosa.»

Por idéntico motivo debiera suprimirse el art. 56, que, inspirado indudablemente en el 29 de la Instrucción de 26 de abril de 1900, no está en armonía con el 45 de la ley de 18 de mayo de 1895, ya que, disponiendo este último que preceda a la publicación de la subasta la aprobación del Ministerio, que habrá de hacerse de Real orden, según el art. 24, no cabe que contra una resolución de esa naturaleza se autoricen reclamaciones en vía gubernativa, como se pretende.

Por el contrario, los artículos 48 y 49, cuya supresión propone esa Dirección general, pudieran subsistir en sentir del Consejo, el 48, porque, a falta de disposición expresa que la autorice, no hay ninguna que prohíba la penalidad que en el mismo se establece contra los licitadores de mala fe, que presentan proposiciones que exceden del tipo de la subasta, o no contengan proposición sobre la cantidad tipo del remate, los cuales, por el mero hecho de presentar tales proposiciones, se someten voluntariamente a las condiciones del pliego de subasta; y el 49, porque el artículo 13 de la repetida Instrucción de 26 de abril de 1900, no excluye los valores de las Diputaciones provinciales en caso de subasta ante el Ayuntamiento, siempre que, y esto debiera hacerse constar como aclaración, reúnan las condiciones que el propio artículo determina.

Y examinados esos artículos, queda uno, el 38, sobre el cual el Consejo llama la atención de V. E.; porque consignándose en él que «el Ayuntamiento se obliga del modo más solemne a satisfacer al concesionario la cantidad que hubiese resultado a cargo de la Corporación en el presupuesto definitivo de las obras, en la forma y plazos que la Corporación y la Junta Municipal acuerden al resolver sobre todas las condiciones del pliego, pasando a formar dicho acuerdo parte del mismo», es lo cierto que; como habrá podido observarse por la lectura del extracto del expediente que precede, al resolver el Ayuntamiento y la Junta sobre el proyecto a su deliberación sometido, nada dijeron ni consta que después hayan resuelto sobre extremo tan importante y que tanto interesa conocer a los futuros licitadores de la subasta que ha de celebrarse. En su consecuencia, sería conveniente que se excitara el celo de la Corporación y Junta Municipal, a fin de que en un término prudencial resuelva acerca de la forma y garantías del pago de que se trata, en armonía con las disposiciones vigentes, sometiendo el acuerdo a V. E., para que se considere incluido entre las condiciones del pliego general antes de su aprobación definitiva.

Acerca de las expropiaciones consideradas como necesarias, nada habrá de decir el Consejo, por referirse a extremo dependiente del trazado de la nueva vía, y por consiguiente, de carácter técnico, sin que, por otra parte, se hayan producido acerca del mismo reclamaciones fundadas de los propietarios interesados.

Y con esto pasa el Consejo al examen general del último punto que habrá de ser objeto de

la Real orden que, como resolutoria de este expediente, debe dictarse en cumplimiento del artículo 24 de la ley de 18 de marzo de 1895, o sea en el relativo a las tasaciones y valoraciones de bienes y derechos, cuya expropiación se considera indispensable para la ejecución del proyecto de reforma.

Aunque la repetida ley parece autorizar a V. E. para otorgar o no su aprobación a las tasaciones que cuenten con la conformidad de los interesados o con el fallo del Jurado en su caso, facultad que implica el reconocimiento del derecho de alta inspección, entiende este Consejo que, salvo circunstancias excepcionales, no debe ejercitarse, a fin de dejar a salvo el respeto que deben merecer siempre verdaderos convenios en que cada una de las partes ha estado debidamente representada, y resoluciones de un Tribunal que, como el Jurado, tiene una especial competencia y un más completo conocimiento de los hechos que deben tenerse en cuenta para determinar las valoraciones, y por ello ha prescindido del examen de las practicadas en tal forma y con tales requisitos.

Análogo criterio debe seguirse respecto a los fallos del Jurado que no han sido apelados en tiempo y forma procedentes, o sea dentro del plazo de cinco días, determinado al efecto en el artículo 41 de la ley de 18 de marzo de 1895 y mediante la presentación de la instancia que exigen las disposiciones vigentes sobre procedimiento administrativo, sin hacer distinción en este punto entre los particulares interesados y el Ayuntamiento, porque tampoco la hace el art. 90 del reglamento de 15 de diciembre de 1896, en cuanto determina que, «transcurrido el plazo de cinco días sin haberse interpuesto recurso (es decir, que no basta anunciarlo ni acordar interponerlo), la resolución del Jurado será firme, sin que contra ella quepa recurso administrativo alguno.»

Eliminados esos expedientes de valoración, quedan por examinar aquellos en los cuales consta que se apeló por los interesados contra los fallos del Jurado especial que la ley determina.

El Consejo ha examinado con todo el detenimiento que la urgencia de la consulta le ha permitido, todos y cada uno de los indicados recursos de alzada, y debe manifestar a V. E. su conformidad con lo propuesto acerca de los mismos por la Junta de Urbanización y Obras y Sección y Dirección correspondientes de ese Ministerio, las cuales, con la sola excepción de las casas, números 15 de la calle de Jacometrezo y 1 y 9 de la del Desengaño, en las que entiende que debe rebajarse la tasación, de conformidad con lo propuesto por los autores del proyecto, proponen que se confirmen los fallos del Jurado.

Para expresar esta opinión ha tenido presente el Consejo, en primer término, que las reglas concretas que sobre tasación se establecen en el art. 20 de la ley y Real orden de 7 de octubre de 1902, en relación con el precepto del art. 58 del reglamento de 15 de diciembre de 1896, limitan en realidad los recursos de alzada a los casos de infracción legal, vicios sustanciales de procedimiento o verdadera lesión; y después, que a tenor de aquellas mismas disposiciones, la valoración tiene en parte que fundarse en la apreciación técnica de ciertos hechos, que necesariamente han de ser de la especial competencia del Jurado de Urbanización y Obras de ese Ministerio, cuyo informe exige la ley como necesario.

Ahora bien, examinados los recursos, resulta que mientras unos pretenden que se prescinda de la renta de la finca, contra lo dispuesto en la ley (como el dueño de la casa núm. 31 de la calle de Jacometrezo), otros recusar los datos que acerca de tal extremo proporciona el Registro fiscal, o aducen aumentos de valor por obras de mejora o reparación que no resultan acreditadas en forma o resultan ya apreciadas debidamente; o protestan contra los tipos de capitalización, indemnización o demérito y las clasificaciones hechas por el Jurado en virtud de facultades, legalmente discrecionales; o insisten en alegaciones ya justamente desestimadas, sin alegar nuevos argumentos; o se limitan a comparar la tasación de sus fincas, con las de otras que ellos consideran en idénticas o inferiores condiciones, y que en realidad están en otras distintas, y no faltan algunos (como los propietarios de las casas números 13 de la calle de San Bernardo y 18 de la de Isabel la Católica), que no están conformes con que se les dé la tasación de sus peritos, que hacen consideraciones sobre el empleo que se ha de dar al importe de las expropiaciones; que protestan de que no se haya reconocido su casa, siendo así que se negaron a ello; que aducen tener su finca asegurada en mayor suma que la de su tasación; que solicitan indemnización

a título de industriales por tener arrendada su casa a un periódico, o hacen alegaciones tan improcedentes como éstas, a juicio del Consejo.

Los que aducen infracción legal o vicio sustancial del procedimiento no acreditan debidamente tales circunstancias, antes bien, quedan desvirtuados en el examen del expediente, como sucede en el presentado por Hernández de la Rúa, a nombre y sin poder bastante de sus hijos emancipados, pidiendo la nulidad de lo actuado en su expediente a pretexto de no haber sido citados, cuando se prueba que tuvieron en el mismo, constante intervención.

En cuanto a los que principalmente se fundan en error de hecho tampoco logran justificar sus afirmaciones, pues en el expediente relativo a la casa, núm. 15 de la calle de Jacometrezo, por ejemplo, aunque a primera vista parece que la tasación del Jurado es inferior a la de los Arquitectos municipales adicionada en la forma que determina la Real orden de 7 de octubre, resulta comprobado que dichos Arquitectos cometieron error al determinar el promedio de la renta.—En el expediente relativo a la casa, núm. 7 de la calle de la Flor Baja, no se ha atendido al precio de adquisición, sino a la renta, como determina la ley.—Y aunque en los expedientes de las casas número 6, de la calle de San Jorge, y 35 de la calle de Mesonero Romanos, se cometiera en el primero, un error aritmético de 59 pesetas y en el segundo el de no apreciar una guardilla, la escasa cuantía de la equivocación en ambos y de su transcendencia en el fallo, no permiten tenerlos en cuenta.

En resumen: por las consideraciones expuestas, el Consejo opina que puede V. E.:

1.º Aprobar desde luego y procurar la ejecución inmediata de la parte del proyecto comprendida entre la plaza del Callao y la Red de San Luis, y subordinar la aprobación de los trozos comprendidos entre la plaza de Leganitos y la plaza del Callao, y entre la Red de San Luis y la calle de Alcalá, a que la reforma de los mismos se haga en el sentido de que las nuevas vías tengan también un ancho de 35 metros.

2.º Aprobar la tramitación del expediente, sin perjuicio de subsanar las omisiones advertidas en la forma que se indica en el cuerpo de este dictamen.

3.º Aprobar igualmente, previas las adiciones, aclaraciones y modificaciones que en el propio dictamen o en estas conclusiones se expresan, el pliego de condiciones facultativas y económico administrativas.

4.º Disponer que el Ayuntamiento, que es el concesionario del proyecto, por disposición de la Real orden de 27 de enero de 1899, ventile con los Arquitectos la cuestión relativa a la retribución de sus trabajos profesionales antes de ejecutar aquél.

5.º Disponer que el Ayuntamiento manifieste la cuantía y origen de los fondos que acuerde emplear en la ejecución por subasta de la obra de que se trata.

6.º Aprobar las expropiaciones que en el proyecto se consideran necesarias.

7.º Aprobar en los términos propuestos anteriormente por este Alto Cuerpo las tasaciones y valoraciones practicadas en los bienes y derechos sujetos a expropiación.

8.º Desestimar las reclamaciones formuladas por el Marqués de Zafra sobre la totalidad del proyecto, excitando al propio tiempo el celo de la Corporación municipal y de la Junta de Urbanización y Obras de ese Ministerio, para que cumplan sin demora lo dispuesto en la ley de 17 de septiembre de 1896, Real orden de 26 de marzo de 1903 y demás disposiciones aplicables sobre formación de un plan general de reforma del interior de la población de Madrid.

9.º Desestimar las instancias de los herederos de D. Carlos Velasco; y

10. Desestimar igualmente las instancias presentadas por varios comerciantes e industriales, en las que pretenden reforma de algunas disposiciones generales vigentes, o que se les conceda indemnización, fuera del plazo, o sin las justificaciones que las mismas determinan.»

1.º Considerando, que el proyecto que a este expediente da ocasión ha de ser mirado y apreciado como medio de realizar importantísimas reformas que han de mejorar y sanear varias zonas de las más céntricas de la Corte; pero, no obstante, la denominación vulgar con que se le designa, ni se preparó con el carácter de «Gran Vía», ni en tal concepto ha de ser juzgado, ya que, aparte otras razones técnicas, la calle proyectada ha de tener en el centro distinta latitud de la que se propone para los extremos. El unificarla, como el dictamen del Consejo de Estado propone, fijándola en 35 metros para todos los trozos que el proyecto comprende, envolvería

un aumento en las expropiaciones de tal magnitud, que el Ayuntamiento a cuyo cargo corre la solvencia del déficit no tendría ciertamente recursos para acometer la empresa.

La urgencia de iniciarla está, sin embargo, impuesta por altos deberes de Gobierno y por verdaderas y estrechas obligaciones morales. Las cifras de mortalidad de Madrid a un tiempo mismo espantan y sonrojan. La circulación en los sitios céntricos resulta excesiva y aun peligrosa, sobre todo en determinados días y horas; y para no demorar el comienzo de remedio que estos males piden, este Ministerio ha debido preocuparse, y se ha preocupado, de buscar fórmula que armonice las indicaciones bien inspiradas del Alto Cuerpo Consultivo con la posibilidad y la urgencia de la reforma.

Por lo que a la parte central del proyecto atañe, la dificultad, afortunadamente, no existe, ya que las expropiaciones están calculadas con arreglo a latitud de 35 metros, y como la de 20 que para los trozos extremos se propone puede, con justicia, tacharse de insuficiente, dadas las necesidades de la vida moderna, parece lo más acertado ampliarla hasta 25 en esos trayectos, lo que no exigirá gran aumento de la zona expropiable, aunque impondrá tal vez la forzosa adquisición de alguna casa aislada que podría intentarse por convenio.

2.º Considerando, que la importancia y consiguiente utilidad del proyecto que se examina se muestran y demuestran con la sola indicación de que se ha de expropiar, para realizarlo, las siguientes casas: Alcalá, del 41 al 45; Torres, del 3 al 7 y el 2; San Jorge, del 4 al 8; Reina, todos los números pares; San Miguel, toda la calle; Clavel, del 1 duplicado al 7; Caballero de Gracia, todos los impares y el núm. 2; Montero, núm. 53, Hortaleza, del 2 al 12 y el 5; Fuencarral, 2 y 4 y 1 y 3 al 7; Desengaño, del 1 al 17 y del 2 al 8; Travesía del Desengaño, 4 y 6 y 5; Leones, toda la calle; Hilario Peñasco, toda la calle; Horno de la Mata, del 2 al 16 y del 3 al 15; Jacometrezo, del 1 al 59 y del 4 al 80; Tres Cruces, 8 y 10; Salud, 17 y 19; Chinchilla, 9 y 11; Mesonero Romanos, del 19 al 35 y del 24 al 38; Abada, 22 al 28 y 30; San Jacinto, toda la calle; Carmen, 40 y 42; Postigo de San Martín, del 17 al 25, Hita, toda la calle; Travesía de Moriam, toda la calle; Tudescos, del 13 al 37 y del 16 al 36; Silva, del 11 al 39 y del 14 al 30; San Bernardo, del 8 al 16 y del 11 al 17; Ceres, del 3 al 15 y del 2 al 26, Travesía de Altamira, toda la calle; Peralta toda la calle; Flor Alta, todos los números impares; Flor Baja, todos los números pares; Federico Balart, toda la calle; Parada, toda la calle; plaza de los Mostenses, núm. 24; Rosal, toda la calle; Isabel la Católica, 16 al 20 y 23 duplicado al 38; San Cipriano, toda la calle; Eguiluz, toda la calle; Santa Margarita toda la calle; Leganitos, del 36 al 42; plaza de Leganitos, toda la calle; Reyes, 20 y 22 y 29 y 31; y los solares, Jacometrezo, 52; San Bernardo, 13; Federico Balart, 4; Parada, 6, 8 y 13; Eguiluz, 9, y plaza de Leganitos, 2, así como también 22 solares que posee el Ayuntamiento, adquiridos para prolongar la calle de Preciados.

Cuantos conozcan o recorran la zona de Madrid a que la reforma afecta, habrán de reconocer la conveniencia de un proyecto, mediante el cual desaparecen calles lóbregas, estrechas e insuficientes, como las de San Miguel y la Reina, Hortaleza y Fuencarral en su enlace con la Red de San Luis; viviendas antiguas y antihigiénicas, como las de las calles de Jacometrezo y Tudescos y algunas de las del Desengaño; callejones tales como los que unen estas dos últimas, y otras que no hace falta enumerar, para que se comprenda cuanto representa la obra proyectada en luz, anchura, espacio y ventilación, condiciones todas tan necesarias para la salud y la vida de los habitantes de Madrid.

Todavía merece ser notada otra ventaja, cual es la de enlazar las estaciones de los ferrocarriles del Norte y del Mediodía, acortando considerablemente la distancia entre ellas y facilitando así la comunicación.

3.º Considerando, que según han advertido las diversas Corporaciones y entidades que intervinieron en este expediente, no se ha oído en él a los poseedores de derechos reales ni a los arrendatarios, comerciantes e industriales, a los que reconoce este derecho el artículo 20 de la ley de 18 de marzo de 1895, ni se les requirió individualmente por el Gobernador, conforme al art. 23, para que declarasen su conformidad o disconformidad con las tasaciones, y que amparando estas prescripciones intereses legítimos, importa subsanar esta omisión. Es ello, no sólo posible sino fácil, y no fuera justo, por tanto, mirar la falta de aquel requisito como un defecto legal de tal entidad que acarrearía la nulidad total del expediente.

Dispone la ley que para cada nuevo proyecto se forme un especial Jurado, y disuelto por mandato de la ley misma el que entendiera en el examen del proyecto que origina este expediente, surge la dificultad de faltar Tribunal a que someter las posibles reclamaciones de los interesados a quienes los párrafos anteriores aluden.

Pero tiene este Ministerio, por el art. 24 de la ley de marzo del 95, facultad para dár o negar aprobación al proyecto, a las expropiaciones que se estime necesarias, a las tasaciones con que se muestren conformes los interesados o hayan sido falladas por el Jurado, y parece indudable que esta facultad discrecional puede extenderse en el presente caso hasta dictar las providencias necesarias para amparar intereses legítimos, sin estorbar ni retrasar siquiera indefinidamente la ejecución de la obra.

El art. 20 de la ley, y el 9.º de su reglamento, señalan clara y concretamente el modo de reconocer tales derechos y fijan el tipo de indemnización. No hay aquí, pues, por resolver cuestión alguna de carácter técnico que haga indispensable la especial competencia del Jurado ni de la Junta Consultiva de Urbanización, y este Ministerio puede, por tanto, conocer en única instancia administrativa de las reclamaciones que se formulen.

Para que así suceda, el Gobernador, una vez recibida esta Real orden, requerirá *individualmente*, según dispone el art. 23 de la ley, tantas veces citada, a los poseedores de derechos reales, arrendatarios, comerciantes e industriales; les otorgará un plazo de quince días para que justifiquen su derecho, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 20 de la ley y 9.º del reglamento, y remitirá enseguida, con su informe, el expediente a este Ministerio para la resolución que proceda y que deberá dictarse antes de que la subasta se realice.

4.º Considerando, en cuanto a las reclamaciones formuladas por los herederos de D. Carlos Velasco, que al estudiarlas se advierte, desde luego, su falta de justificación, por las razones que a renglón seguido y con la posible brevedad se apuntan.

En primer término, consta del expediente que en enero de 1886 presentó D. Carlos Velasco al Alcalde un proyecto de Gran Vía, acompañado de una proposición de Mr. Claude Perret para realizarlo, y que tramitado en las oficinas municipales en 3 de marzo siguiente, acordó el Ayuntamiento aprobarlo, pero consignando textualmente en el acuerdo que tal aceptación no creaba compromiso alguno para la Corporación municipal. El Sr. Perret no consignó el depósito, y cesó por esto su intervención.

Más tarde, un grupo de capitalistas franceses, de acuerdo con Velasco, presentó proposiciones para realizar la obra, y como sus términos no se ajustaran a los preceptos de la ley del 79, única norma legal entonces para el desenvolvimiento de empresas tales, se pensó y aun se intentó que las Cortes dictaran una ley especial, desistiendo del propósito ante las dificultades que se ofrecieron, y volviendo a la tramitación impuesta por la ley a la sazón vigente para solicitar, como lo hizo el Ayuntamiento en noviembre del 87, la declaración de utilidad pública del proyecto, que no llegó a otorgarse.

Pasaron años; promulgóse la ley de 18 de marzo de 1895, y los herederos de Velasco acudieron solicitando que se tuviera su proyecto por acogido a los beneficios que se derivaban de la nueva disposición legal. Una Real orden de 24 de abril de 1901, dictada de acuerdo con el Consejo de Estado en pleno, declaró, resolviendo esta petición, que se les tuviese por acogidos a los beneficios de la nueva ley; pero con la obligación natural que ella misma en diversos preceptos impone, de que el proyecto se ajustara a las nuevas formalidades exigidas.

Consignó, además, previsora, esta soberana disposición, que al declarar lo que declaraba, no entendía otorgar ni establecer privilegio alguno en favor del proyecto Velasco. Sus causahabientes impugnaron en vía contenciosa esta Real orden únicamente, según tienen con repetición consignado, por lo que a esta declaración se refiere, y en la demanda con que iniciaron este pleito, que aun sigue sin resolver, sostuvieron ya el derecho de prioridad de que se juzgan asistidos, y que una y otra vez, siempre con éxito desgraciado, han venido alegando en este expediente.

Parecía natural que, sometido por ellos mismos el asunto a la jurisdicción contenciosa, se abstuviesen de plantearlo de nuevo ante la Administración activa; pero lejos de esto, con actos repetidos han vuelto a someter al conocimiento de este Ministerio el examen de los supuestos

derechos de prioridad, haciendo ineludible el tratar de nuevo el asunto en esta Real orden, ya que ni sería justo ni lo consiente la urgencia de resolver el problema planteado en este expediente, que se aguardara a conocer el fallo que la Sala tercera del Tribunal Supremo dicte en su día en el pleito que siguen los herederos de Velasco.

Respetando la jurisdicción que hoy entiende en el asunto, y sin invadir su esfera de acción, dentro de la suya propia y privativa, la Administración ni puede ni debe excusarse de expresar su juicio después de examinar los nuevos elementos que se le someten. Por fortuna, este examen no sirve sino para confirmar y robustecer el fundamento de los motivos que inspiraron la Real orden de 24 de abril de 1901, impugnada, pero no revocada, y en sus declaraciones ha de ratificarse necesariamente este Ministerio. Los nuevos antecedentes alegados no alteran en lo esencial los hechos conocidos. El Ayuntamiento a nada se comprometió respecto del proyecto Velasco. Desestimó las proposiciones que se le presentaron para construir la Gran Vía, y no reconoció en sus autores derecho alguno.

La declaración de utilidad pública, indispensable entonces conforme a la ley del 79, no se hizo, y cuando, sin estar en posesión de ningún derecho a su favor, previamente creado, los herederos de Velasco solicitaron acogerse a los beneficios de la ley del 95, con ese solo acto, y conforme al segundo de sus artículos adicionales, desistieron de toda la tramitación anterior, colocándose en condiciones iguales a las de aquel que por vez primera, y sin historia alguna en el asunto, solicitara hacer el estudio de las obras en el antiguo proyecto comprendidas o de otras análogas, ya que, en todo caso, el proyecto había de formarse de nuevo para ajustarlo a las nuevas disposiciones.

Sostienen con ahinco los reclamantes a quienes ahora se alude, que el proyecto que da origen a este expediente no es otra cosa que una copia servil, un verdadero plagio, del que, con muchos años de anterioridad, estudió y presentó su causante, y esta convicción les llevó a intentar un procedimiento criminal contra los autores del proyecto del día; pero no debieron encontrar manera de acreditar su razón, porque la causa fué sobreseída. Por otra parte, la Junta de Urbanización y Obras, al examinar la pretensión deducida por los herederos de Velasco para que se hiciera un estudio comparativo de ambos proyectos, después de indicar que no podían estudiarse comparativamente por no estar el proyecto Velasco estudiado y formulado conforme a la ley del 95, no ha tenido reparo en añadir que es distinta la idea generadora de uno y otro trabajo, distintos los trazados generales y los detalles y distinta la zona de expropiación.

Después de todo esto, que por nadie podrá ser negado, ¿qué queda por apreciar en lo que a la reclamación Velasco se refiere? Queda únicamente un empeño tenaz, y, sin duda, respetable por los móviles a que responde, de hacer prevalecer aquel proyecto, y unas solicitudes con las que en defensa de un interés, que se estima legítimo, se intenta dificultar, y a esto es a lo que no puede accederse, la tramitación de un proyecto que representa una serie de reformas beneficiosas para la población de Madrid.

5.º Considerando, que después de remitido el expediente al Consejo de Estado se recibieron en el Ministerio varias instancias, a saber: una del Círculo de la Unión Mercantil, solicitando que se atiendan las reclamaciones de comerciantes e industriales; otra del Sr. Courchinaux, pidiendo que se otorgue indemnización aun a aquellos industriales y comerciantes que no lleven establecidos en la zona que ha de expropiarse los diez años que marca la ley; otra de los herederos de Velasco, en que insisten en proponer se acepten unas bases, mediante las cuales se comprometen a realizar el proyecto de Gran Vía; y otra del Marqués de Zafra, que, reproduciendo anteriores reclamaciones, pide se tenga a la vista el primitivo expediente de reforma de la calle de Preciados y se exija responsabilidad por no haberse dado cuenta al Ayuntamiento de una instancia del señor Hortsmann, en que pedía se le transfiriera la autorización para estudiar el proyecto.

Las pretensiones del Círculo Mercantil en defensa de los intereses legítimos de comerciantes e industriales han sido ya atendidas por este Ministerio, cuanto podían serlo, según consta de anteriores considerandos, y lo que el Sr. Courchinaux pide, como representa una modificación de la ley, no puede otorgarse.

Tampoco es posible acceder a lo que piden los herederos de Velasco. El proyecto que defienden quedó sujeto a la ley de 1895, y desde la Real orden de 1901, que así lo declaró, tiempo tu-

vieron para formularlo de nuevo y presentarlo a la aprobación del Ministerio, antes de que surgiera el actual. No lo han hecho, y como a las disposiciones de aquella ley han de sujetarse todos los proyectos de reforma interior de grandes poblaciones, no cabe aceptar contratos como los que en su instancia los herederos de Velasco proponen, ni preparar la construcción de obras sino por los procedimientos legales establecidos.

En cuanto a las reclamaciones del Marqués de Zafra, ha de notarse que desde el instante en que se autorizó al Ayuntamiento para reformar el proyecto de prolongación de la calle de Preciados y se aprobó el actual, se le autorizó implícitamente para abandonar los anteriores estudios que con él tuvieran relación, y no es indispensable, por lo tanto, traer a la vista el primitivo expediente, como con insistencia porfiada lo ha pretendido y pretende el citado Sr. Marqués. El hecho, que también apunta su insistencia, de no haberse dado cuenta al Ayuntamiento de las del señor Hortsmann, no puede envolver, y menos en el actual estado del expediente, la nulidad de lo actuado, que tan graves perjuicios irrogaría a la población de Madrid y al Municipio, tanto más cuanto que el interesado desistió, sin duda, de sus pretensiones, pues a partir de mayo de 1900 no aparece a su nombre ninguna nueva reclamación;

6.º Considerando, que al otorgar la ley de marzo de 1895 faculta a un Ayuntamiento que, una vez autorizado, estudia un proyecto de obra, para realizarlo por sí o mediante subasta, no consiente que la Corporación peticionaria se desprenda del derecho adquirido para transferirlo a un particular, ya que éste, en virtud de su derecho de tanteo, estorbaría o dificultaría la libre concurrencia a la subasta, pudiendo estar siempre seguro de realizar por sí las obras, lo que pugna con el espíritu de la ley;

7.º Considerando, que deben ser aprobadas las expropiaciones que el proyecto señala como necesarias, y las tasaciones y valoraciones practicadas de todos los bienes y derechos que han de expropiarse, con las solas excepciones siguientes: casa y solar núm. 22 de la calle de la Flor Baja; Isabel la Católica, 23, y San Cipriano, 1; Jacometrezo, 15; Desengaño, 1 y 9, 11 y 13, y Carbón, 10 y 12; Parada, 2; Federico Balart, 7; Flor Baja, 10, y las de los 13 expedientes de comerciantes e industriales; Clavel, 4; Fuencarral, 5; Caballero de Gracia, 15 y 23; Jacometrezo, 1, 17 y 44; Leganitos, 38; Clavel, 2 y 4; travesía del Desengaño, 4 y 6; Clavel, 6 y 2;

8.º Considerando, en cuanto a las fincas números 22 de la calle de la Flor Baja, 23 de la de Isabel la Católica, y San Cipriano, 1, que los Arquitectos cometieron error al justipreciarlas, y así lo han reconocido y declarado, atribuyéndoles un valor excesivo por haber tasado el solar, que tiene vuelta a dos calles, con arreglo a la valoración de la principal. El Jurado, no obstante, se negó a admitir la segunda tasación, que es la verdadera, y representa cantidad mucho menor; pero este Ministerio, conociendo estos datos, no puede contribuir a que el error se consolide, y, usando de las facultades del art. 24 de la ley, considera de su deber revocar el fallo del Jurado y resolver fijando como cantidad a indemnizar por todos conceptos, comprendiendo casa y solar, la consignada por los Arquitectos del Municipio en su segunda tasación, que es inferior a la primitiva en 68.585'69 pesetas, y en 87.419'14 a la que establece el Jurado;

9.º Considerando, que no cabe admitir ni estimar como recurso de alzada los acuerdos del Ayuntamiento para apelar de los fallos del Jurado en varios expedientes de expropiación de fincas, porque, según hace notar el luminoso informe del Consejo de Estado, los tales recursos no llegaron a redactarse ni a presentarse en forma, sin que valga alegar lo que acaba de resolverse con respecto a la casa y solar Flor Baja, núm. 22, porque en este caso, sin admitir el recurso del Ayuntamiento, este Ministerio subsana un error, usando sus facultades de alta inspección y las que la ley de marzo le atribuye;

10. Considerando, en cuanto a las fincas, Jacometrezo 15, Desengaño 1, 9, 11 y 13 y Carbón 10 y 12, que procede, de acuerdo con la Junta de Urbanización y Obras de este Ministerio, revocar el fallo del Jurado y aceptar la tasación de los Arquitectos municipales;

11. Considerando, que los expedientes relativos a las casas Jacometrezo 8 y travesía del Desengaño 2, y Reina 4, se han remitido a este Ministerio con posterioridad al informe de la Junta de Urbanización y del Consejo de Estado, y que planteadas en ellos cuestiones de carácter técnico, es indispensable el informe de la citada Junta, por lo que debe aplazarse el resolver hasta que, una vez emitido, llegue el instante de hacerlo también, como ya queda dicho, sobre las reclama-

ciones de los poseedores de derechos reales, arrendatarios, comerciantes e industriales, resolviendo así la dificultad que el lamentable retraso en el envío de estos expedientes originó;

12. Considerando, que al determinar el art. 20, el tanto por ciento de bonificación abonable por afección y perjuicios, se refiere sin duda, a juzgar por el texto del último párrafo, a los bienes cuya valoración requiere tasaciones periciales, y no siendo esto aplicable a los derechos de arrendatarios, comerciantes e industriales, que no necesitan justiprecio porque la ley fija de un modo claro y concreto la indemnización, procede revocar en este punto el fallo del Jurado;

13. Considerando, que el expediente relativo a la casa núm. 2, de la calle de la Parada, Federico Balart, 7 y Flor Baja, 10, se tramita con arreglo a la ley de Expropiación de 1879, y por ello no han informado en él la Comisión provincial ni el Gobernador, el Jurado ni la Junta Consultiva de Urbanización; que ha intervenido ya el Perito tercero, y que todo esto da a este caso una especialidad que aconseja abstenerse de resolver y declarar que este expediente debe terminarse conforme a la ley, bajo cuyos preceptos se inició, ya que ni existe reclamación alguna en contrario, ni hay en ello perjuicio de tercero, y el hacer otra cosa podría originar, sin ventaja para nadie, gastos considerables al Ayuntamiento;

14. Considerando, que del estudio que el Consejo de Estado hace del pliego de condiciones económico administrativas, y resolviendo, en general, de conformidad con su dictamen, en vista de las alteraciones propuestas, surge la necesidad de que se redacte de nuevo para que el Ayuntamiento sepa a qué atenerse, y una vez aprobada como definitiva la nueva redacción, pueda unirse al proyecto y servir de base a la subasta;

15. Considerando, que se ignora el origen y la cuantía de los fondos con que el Ayuntamiento ha de satisfacer la diferencia entre los gastos y los ingresos del proyecto, y la falta de este requisito legal podría retraer a los postores, de la subasta, por lo que antes de ella debe el Municipio subsanar esta omisión, acordando lo que proceda, y poner su acuerdo en conocimiento de este Ministerio para que sirva de adición al pliego de condiciones económico administrativas;

16. Considerando, que encargados los Arquitectos D. José López Sallaberry y D. Francisco Andrés Octavio de estudiar el primitivo proyecto de reforma de la calle de Preciados, reconocieron la imposibilidad de realizarlo, y en su lugar propusieron el actual, asegurando que en él se respetan todos los derechos adquiridos y se utilizan las fincas ya expropiadas por el Ayuntamiento; y aceptada la propuesta, se solicitó del Ministerio la oportuna autorización, que fué otorgada por Real orden de 27 de enero de 1899. Una vez autorizada la Corporación municipal, para realizar estos estudios, consignó el depósito correspondiente, ordenó a los citados Arquitectos que dirigieran los trabajos, y tomó a su cuenta los gastos, proporcionándoles, además, personal auxiliar, así facultativo como administrativo. Era el Ayuntamiento propietario único del antiguo proyecto de prolongación de la calle de Preciados, y no podía perder ese carácter por aceptar las modificaciones que en él hicieron los Arquitectos, deseosos de mejorarlo, como funcionarios municipales y como vecinos de Madrid. Que los propios Arquitectos lo entendían así, se demuestra sólo con recordar que ellos propusieron al Ayuntamiento solicitara de la Superioridad la autorización para los estudios conforme a la ley de 1895, pues de pensar entonces otra cosa la hubieran ellos mismos solicitado como particulares, logrando así el concepto y los derechos de tales propietarios. Lejos de esto, la Real orden de 27 de enero de 1899, reconoció la propiedad del Ayuntamiento sobre el proyecto primitivo y le otorgó la del actual, con arreglo al artículo 16 de la ley de marzo del 95, según el que, estas autorizaciones pueden concederse a Ayuntamiento, empresas o particulares. Tales concesiones envuelven naturalmente la del derecho de propiedad, sin que los peritos que formularon el proyecto fuesen en este caso otra cosa que mandatarios del Municipio.

Podrán existir entre las empresas particulares y sus peritos contratos privados respecto de la propiedad de los proyectos, pero no cabe admitirlos entre las Corporaciones municipales y sus auxiliares. El particular que posee unos derechos puede cederlos a quien y cuando le convenga. Los Ayuntamientos tienen el concepto de Administradores, y necesitan, para ceder aquellos de que son representantes, la autorización superior. En este caso, además, la ley del 95 no autoriza a los Municipios sino para hacer por sí las obras o sacarlas a subasta, y el ceder la pro-

piedad a los Arquitectos dañaría los intereses del vecindario y perjudicaría a los concurrentes a la subasta, que habrían entonces de luchar con el derecho de tanteo.

El Ayuntamiento procedió siempre como propietario al ordenar a los Arquitectos hiciesen los estudios, al proporcionarles personal auxiliar, al costear los gastos, al tramitar el expediente sin protesta de nadie en sus oficinas, y en tal condición, quedó nuevamente reconocido y ratificado por la Real orden de 26 de enero de 1901, que a la Corporación municipal y no a ninguna otra entidad, otorgó prórroga para terminar los estudios, y por la de 28 de julio de 1902, que declaró no haber inconveniente en que se la devolviera el depósito que había constituido conforme al artículo 16 de la ley y al 25 del reglamento;

17. Considerando, que el acuerdo del Ayuntamiento de 29 de mayo de 1903, por el que se declaró que los Arquitectos Sallaberry y Octavio, como autores del proyecto que *se dijo* debido a su iniciativa, eran sus verdaderos propietarios, añadiendo, al intentar dar apariencias de fundamento a esta inesperada declaración que el mandato que la Alcaldía les confiriera no tuvo otro objeto que facilitar la tramitación del expediente, y que los gastos hechos no debían mirarse como títulos de propiedad ni el Ayuntamiento podía aspirar a otra cosa sino a reintegrarse de los fondos que anticipó, y que en el caso de ejecutarse la obra, los autores del proyecto deberían percibir el total importe de sus derechos y honorarios, y estimando, por los antecedentes expuestos, que con el acuerdo que se deja relacionado infringió el Ayuntamiento la ley Municipal y la de 18 de marzo de 1895, lesionando gravemente los intereses confiados a su custodia.

18. Considerando, que la ley del 95 no concede a los Ayuntamientos, cuando se trata de proyectos presentados por Sociedades o particulares, atribuciones sino para exponer el proyecto al público, admitir reclamaciones, oír el informe de los Arquitectos municipales, y con el suyo y el de la Junta de Asociados, que también debe figurar en el expediente, elevarlo después al Gobernador de la provincia, sin que sea lícito, cuando de proyectos de particulares se trate, proceder como aquí se ha hecho; anticipar fondos, tramitar el expediente en las oficinas municipales, prestar el personal auxiliar, pues esto se explica siendo el Ayuntamiento el propietario; pero no siéndolo, como ahora se pretende, unos particulares.

Si de proyecto de empresas o particulares se tratara, una y otros hubieran necesitado obtener previamente autorización para hacer los estudios. La obtuvo, según se ha visto, el Ayuntamiento, y es ahora del todo imposible que un simple acuerdo municipal autorice una transferencia de derechos, en sí misma ilegal, y que además representaría la burla de toda la tramitación y el olvido de las garantías que la ley del 95 establece.

Infringe, además, el acuerdo de 29 de mayo de 1903, la regla 3.^a del art. 85 de la ley Municipal, porque para traspasar el Ayuntamiento sus derechos todos sobre este proyecto, que puede decirse toma origen en el de 1862, hubiera sido necesario obtener la autorización de este Ministerio, y ni tal solicitud se ha hecho ni a ella hubiera podido en todo caso accederse.

El párrafo tercero de la ley sobre propiedad intelectual de 10 de enero de 1889, que en el acuerdo municipal se cita, no tiene aplicación en el presente caso, porque los Arquitectos obraron como mandatarios del Ayuntamiento, en este concepto es justo que aspiren a ver remunerados los trabajos propios de su profesión, que por consecuencia de este proyecto han realizado. No hay inconveniente en reconocer, procediendo con la serenidad de juicio con que estas cuestiones deben ser juzgadas, que tales proyectos, dada su importancia y transcendencia, salen de la esfera ordinaria de aquellos a que pueden considerarse obligados los Arquitectos municipales, y será, por lo tanto, equitativo pensar en recompensarlos con arreglo a las condiciones que el Ayuntamiento estableció por su acuerdo de 31 de diciembre de 1897, para remunerar éstos o análogos trabajos de índole verdaderamente extraordinaria.

19. Considerando, que en vista de estos antecedentes, procede declarar la nulidad del acuerdo que el Ayuntamiento adoptó en 29 de mayo de 1903, que no puede prevalecer por haber sido adoptado con infracción de la ley Municipal y de la de marzo del 95, y haberse prescindido para la transferencia de la autorización de este Ministerio.

20. Considerando, que según indica el informe del Consejo de Estado, las concesiones de un tranvía y del alumbrado público y particular que se pretende pudieran llegar a convertirse en verdaderos monopolios, e importa, por tanto, examinar las condiciones, requisitos y restricciones

con que hayan de otorgarse. En cuanto al tranvía, no debe concederse ni se concede al Ayuntamiento otra cosa que la calidad de concesionario con facultad de transmitir, pero obligándole a presentar en su día a la superior aprobación, y sujetándose a lo que dispone la ley y reglamento de Ferrocarriles, los oportunos proyectos. En lo que toca al alumbrado público por medio de la electricidad, la cuestión es muy otra, y el Ayuntamiento tiene derecho a ofrecer este beneficio al contratista de las obras, toda vez que la concesión general ha de hacerse mediante subasta pública, y no se limita el derecho de nadie para acudir a la licitación que ha de dar por resultado la concesión o adjudicación que se haga, como sucede en todos los servicios del Estado, provinciales y municipales;

21. Considerando, además, en lo que se relaciona con el ulterior suministro de fluido eléctrico para particulares o para fines industriales, que lo peligroso de los monopolios, así en lo que atañe a los intereses públicos como en lo que toca a los particulares, consiste especialmente en hacer imposible la competencia, y que estos riesgos y quebrantos pueden evitarse previsoriamente exigiendo que el precio del fluido, tanto para el alumbrado público como para el particular y fines industriales, no exceda del promedio del precio a que lo suministren las Compañías instaladas en Madrid a la fecha en que se inauguren las obras, y estableciendo además la obligación de revisar cada cinco años, con este mismo fin, las condiciones y tarifas que se establezcan;

22. Considerando, que si bien es cierto que las reformas de la índole y las proporciones de la que se proyecta han de ajustarse a la ley especial de marzo del 95, la complejidad de este asunto y la entidad de los intereses que en él juegan, son tales, que ni la ley ni el reglamento pudieron prever todas y cada una de las cuestiones suscitadas, no obstante lo que se ha procurado; y será lícito pensar, que conseguido, reconocer y sostener cuantos intereses y derechos quiso amparar con sus prescripciones la citada ley.

23. Considerando, que la ejecución de este proyecto, además de las ventajas que resultarán de la mejora y saneamiento de Madrid, originará el desarrollo y progreso de las industrias que con la construcción se relacionan, facilitando a la vez, durante un período de tiempo no corto, la solución de la crisis obrera.

24. Considerando, que los peligros que el Consejo de Estado apunta en su luminoso informe, consistentes en que al terminarse los trabajos, la crisis se reproducirá y agravará por el inmenso número de obreros que resultará sin trabajo, no puede estimarse como razón bastante para desaprobar este proyecto, porque si a tal consideración hubiera de atenderse, nunca sería posible acometer empresas de verdadera importancia y utilidad, siendo además de esperar que antes de que tal plazo se cumpla se habrá terminado el plan general de reformas del interior de Madrid, pues a activarlo y prepararlo por todos los medios y con diligente actividad se invita y estimula al Ayuntamiento y a la Junta de Urbanización;

Oído el Consejo de Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien:

1.º Aprobar el proyecto parcial de saneamiento del interior de Madrid, denominado «Proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá», con las siguientes latitudes: desde la iglesia de San José a la Red de San Luis veinticinco metros; desde la Red de San Luis a la plaza del Callao treinta y cinco; desde la plaza del Callao a la de Leganitos veinticinco, y autorizar al Ayuntamiento para suprimir, si lo estima conveniente el paseo central proyectado entre la plaza del Callao y la Red de San Luis, invitándole a reducir las rasantes en la forma que indica la Junta Consultiva de Urbanización y Obras de este Ministerio, y tomando también en cuenta las observaciones que sobre este mismo tema formuló la Junta Consultiva municipal.

2.º Disponer la instrucción de un expediente, para que en él puedan reclamar los poseedores de derechos reales, arrendatarios, comerciantes é industriales, en la forma indicada en la parte expositiva, y ordenar que cuando se resuelva este expediente se dicte también resolución en los relativos a las casas, Jacometrezo, 8, con vuelta a la travesía del Desengaño, 2, y Reina, 4.

3.º Excitar el celo del Ayuntamiento y de la Junta de Urbanización y Obras de este Ministerio, para que cumplan sin demora lo dispuesto en la ley de 17 de septiembre de 1896 y Real orden

de 26 de marzo de 1903, sobre formación de un plan general de reforma del interior de la población de Madrid.

4.º Desestimar las instancias de los herederos de D. Carlos Velasco y las reclamaciones formuladas por el Marqués de Zafra.

5.º Desestimar las reclamaciones producidas por varios comerciantes e industriales para la reforma de alguna de las disposiciones de la ley de 18 de marzo de 1895 y su reglamento.

6.º Aprobar las expropiaciones que en el proyecta se consideran como necesarias y las tasaciones y valoraciones practicadas de los bienes y derechos sujetos a expropiación, aprobándose, por lo tanto, todos los expedientes en los que ha existido acuerdo entre el Ayuntamiento y los interesados, todos aquellos en que hay conformidad de las partes con el fallo del Jurado, y resolver los restantes, según propone la Junta de Urbanización.

7.º Desestimar, no admitiéndolos como recursos, los acuerdos del Ayuntamiento resolviendo alzarse de los fallos dictados por el Jurado en varios expedientes de expropiación de fincas.

8.º Revocar el fallo del Jurado en los expedientes de indemnización a comerciantes e industriales en el extremo relativo al reconocimiento del derecho de un 5 por 100 por perjuicios y de un 3 por 100 de afección.

9.º Desestimar los votos particulares de los Sres. Conde de Vilches y García Prieto, estimando en el del primero la propuesta para que sea indemnizado también como industrial el propietario de la finca, cuando acredite debidamente que posee comercio o industria en la misma casa y que reúne las condiciones que exige la ley y reglamento.

10. Aprobar la tramitación del expediente, por no constituir vicio de nulidad los motivos con que se impugna en las reclamaciones.

11. Inhibirse de conocer en el expediente relativo a las casas núm. 2 de la calle de la Parada, Federico Balart, 7 y Flor Baja, 10.

12. Revocar el fallo del Jurado en el expediente que se refiere a la casa y solar núm. 22 de la calle de la Flor Baja, Isabel la Católica y San Cipriano, 1, y aceptar la segunda tasación de los Arquitectos municipales.

13. Resolver que el pliego de condiciones económico administrativas sea el rectificado por este Ministerio, disponiendo se comunique al Ayuntamiento con esta Real orden para que se atenga al definitivo.

14. Manifestar al Ayuntamiento que debe ajustar el pliego de condiciones facultativas a las indicaciones que constan en el informe del Consejo de Estado.

15. Ordenar al Ayuntamiento practique las liquidaciones oportunas para consignar en el pliego de condiciones económico administrativas el importe exacto del presupuesto, y, por lo tanto, las cantidades a que ascienden las fianzas provisional y definitiva, sin perjuicio de lo que resulte de las reclamaciones que promuevan los poseedores de derechos reales, arrendatarios, comerciantes e industriales.

16. Disponer que el Ayuntamiento manifieste a este Ministerio con toda urgencia, la cuantía y origen de los fondos que acuerde emplear en la ejecución de la obra de que se trata y el modo y plazos, en que ha de satisfacer su importe al contratista, a fin de que este acuerdo forme parte del pliego de condiciones económico administrativas.

17. Resolver que el Ayuntamiento es el único propietario y concesionario del proyecto, según declaró la Real orden de 27 de enero de 1889, y que la cuestión relativa a la retribución de los Arquitectos por sus trabajos profesionales extraordinarios, debe ser decidida, expresa y claramente antes de verificar la subasta, no pudiendo en ningún caso exceder la remuneración de la cantidad establecida por el Municipio en su acuerdo de 31 de diciembre de 1897 para recompensar trabajos profesionales que no puedan estimarse como obligatorios para los empleados técnicos municipales. El Ayuntamiento incluirá como gastos del proyecto los que satisfaga por tal concepto.

18. Reconocer al Ayuntamiento la calidad de concesionario del tranvía eléctrico, que deberá instalarse por el sistema de acumuladores o de cables subterráneos, con facultad de transmitir

sus derechos; pero con la obligación de someter el proyecto a la aprobación del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, y de cumplir las disposiciones todas que para la tramitación del asunto consigna la ley de Ferrocarriles y su reglamento.

19. Autorizar al Ayuntamiento para conceder la instalación de los cables conductores y suministro de fluido eléctrico en la forma indicada en el proyecto, y con sujeción a lo que se determina en el pliego de condiciones económico administrativas.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de agosto de 1904.—*Sánchez Guerra*.

Sr. Gobernador civil de la provincia de Madrid.

(Gaceta del 29 de agosto).